

para ni protege á los Sres. Irigoyen y Escobosa, contra el cobro que el C. Administrador de rentas del Estado les hace por introduccion de diez y seis cargas de jabon recibidas por el pailebot Pacífico y ochenta y seis de pañocho por el Flora, fondcados, el primero, el 21 del pasado Mayo, y el segundo, el 30 del mismo mes.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 24 de 1874.—*Lic. Emilio Pardo*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas por el C. Lic. Eduardo G. Pankhurst, en representacion de D. Oscar Lorentzen, contra el Administrador principal de rentas de la Capital del Estado, que le exige el pago del uno por ciento sobre el numerario colocado para su exportacion en el puerto de Matamoros, y contra la disposicion del decreto número 92 de la Legislatura del Estado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Al Juzgado de Distrito.

El Gefe de Hacienda del Estado, desempeñando las funciones de Promotor fiscal, por ministerio de la ley, dice: que el C. Lic.

Eduardo G. Pankhurst como apoderado del Sr. D. Oscar Lorentzen, pide amparo á nombre de este, manifestando: que una vez mas, el Administrador principal de rentas de esta Ciudad, fundándose en el artículo 2º del decreto número 92 de la Legislatura del Estado, fecha 19 de Marzo del año anterior, insiste en cobrar el uno por ciento sobre el numerario destinado para la exportacion, negándose á dar los documentos que se han solicitado para resguardo de las cantidades que en conducta particular extraordinaria, deben salir para Matamoros; cuyo procedimiento ataca la prohibicion establecida en la primera parte del artículo 112 de la Constitucion.

Admitido el recurso, el Administrador principal, evacuando el informe que se le pidió, manifiesta: que es cierto que se sigue cobrando el impuesto de uno por ciento que establecio la ley de Hacienda fecha 19 de Marzo del año próximo pasado, sobre toda cantidad que en numerario ó en pasta de oro y plata se extraiga del Estado, fundándose, en que hasta la fecha no se ha derogado dicho decreto.

Mas como esta disposicion es contraria á la ley general de 20 de Enero de 1869, y la Legislatura del Estado es incompetente para gravar con un derecho cualquiera, los caudales extraidos fuera de su territorio, sea cual fuere la denominacion y carácter de aquel gravámen, el Gefe de Hacienda pide, que la Justicia de la Union proteja y ampare al solicitante.

Zacatecas, 4 de Agosto de 1874.—*José M. Saldiema.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Zacatecas, Agosto 18 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Eduardo G. Pankhurst, en representacion de D. Oscar Lorentzen, contra la Administracion principal de rentas de la Capital, que le exige el pago del uno por ciento

sobre el numerario colocado para su exportacion por el puerto de Matamoros, y contra la disposicion del decreto número 92 de la Legislatura del Estado, fecha 19 de Marzo del año anterior, por no estar autorizado el Estado de Zacatecas para imponer contribuciones sobre importaciones y exportaciones, invadiendo las facultades consignadas al Congreso de la Union en la fraccion 9ª del artículo 72 de la Constitucion general, y con infraccion de la fraccion 1ª del artículo 112 del mismo Código. Vista la suspension provisional; el informe de la Administracion principal de rentas; el pedimento del C. Ge. de Hacienda, que desempeña las funciones de Promotor fiscal por ministerio de la ley, y la citacion para sentencia.

Considerando, primero: que el referido impuesto de uno por ciento llamado de extraccion, cuando recae sobre los caudales puestos en conducta con destino al extranjero, á cuyo efecto se ha pagado ya á la Hacienda federal el cinco por ciento de exportacion y obtenido las correspondientes guías con escala 6 sin ella, se convierte necesariamente en un verdadero derecho de exportacion, que el Estado cobra sin consentimiento del Congreso de la Union, como lo requiere la fraccion 1ª del artículo 112 de la Constitucion.

Segundo: que ademas de esto, la moneda aunque bajo ciertos respectos, es una mercancía igual á cualquiera otra y sujeta á las mismas leyes y principios que todas, en su produccion y consumo, como lo acreditan las sanas teorías de la ciencia económica, bajo otros, conforme á las leyes fundamentales del país, se considera y debe considerarse como una mercancía especialísima, que por lo mismo debe sujetarse á leyes y condiciones tambien especiales.

Tercero: que bajo este respecto, la moneda en el régimen de gobierno que tiene adoptado la República, ha estado siempre sujeta en su produccion, circulacion y extraccion ó exportacion, á las leyes federales, y es conveniente que así se verifique, en in-

teros de toda la República, que se perjudicaría notablemente, si á cada uno de los Estados de la Federacion fuera lícito establecer reglas sobre su produccion y exportacion.

Cuarto: que la necesidad de conservar el valor de la moneda, como una mercancía universal, indispensable para realizar toda clase de transacciones mercantiles, entre los diferentes pueblos de la Tierra, al abrigo de alteraciones caprichosas, y bajo la influencia de leyes uniformes, ha hecho que esa materia se someta á convenciones especiales entre las naciones, poniéndola bajo la proteccion del derecho internacional.

Quinto: que el Gobierno de la República á quien competiría celebrar una convencion de esta especie, en el caso que así pareciera útil á los intereses mercantiles de la misma República, no podría hacerlo, si cada Estado de la Federacion tuviera la libertad de gravar la circulacion de la moneda, cualquiera que fuera la forma y el nombre de ese gravamen, que en último análisis vendría á producir alteracion en el valor de la misma moneda.

Sesto: que por estas razones, la Legislatura del Estado de Zacatecas es incompetente para gravar los caudales extraídos fuera de su territorio, con un derecho, cualquiera que sea su denominacion y carácter; por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 72 fraccion 9ª y 112 fraccion 1ª de la Constitucion general de la República, de conformidad con lo pedido por el C. Ge. de Hacienda, y lo dispuesto en la ley de 20 de Enero de 1869, sentenciando definitivamente este juicio, el Juzgado declara.

Primero: que la Justicia de la Union protege y ampara á D. Oscar Lorentzen, contra el acto de la Administracion principal de esta Capital, que le exigía el pago del uno por ciento sobre los fondos que debia exportar para Matamoros, en cumplimiento del decreto de la Legislatura del Estado, fecha 19 de Marzo del año anterior,

por invadirse en este, facultades del Congreso de la Union.

Segundo: hágase saber; publíquese esta sentencia en el Diario Oficial del Estado; sáquense las copias respectivas para el Semanario Judicial, y remítanse los autos en revision á la Suprema Corte de Justicia.

El C. Juez de Distrito del Estado, lo decretó y firmó. Doy fé.—Firmado.—*Manuel G. Solana.*—*Luis G. Chavez*, secretario.

Es copia que certifico. Zacatecas, 19 de Agosto de 1874.—*Luis G. Chavez*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, 19 de Setiembre de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas por el C. Lic. Eduardo G. Pankhurst, en representacion de D. Oscar Lorentzen, contra el Administrador principal de rentas de la Capital del Estado, que le exige el pago del uno por ciento sobre el numerario colocado para su exportacion en el puerto de Matamoros, y contra la disposicion del decreto número 92 de la Legislatura del Estado, por invasion de la esfera de la autoridad federal. Visto el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal y la sentencia del Juez de Distrito.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion general, se declara: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito, que concede amparo al quejoso.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos, los CC. Presidente y Magistrados

que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio María Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 19 de Noviembre de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Tlaxcala por el C. Lic. Antonio Ramirez, en favor de su defenso Justino Aguilar, contra la pena de muerte que le impuso el C. Gefe político suplente, del Distrito de Calpulalpan.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor dice: que para poder emitir con mas acierto su parecer, necesita de que se le proporcione la causa formada por el C. Prefecto suplente de Calpulalpan, á Justino Aguilar; y como la ley de 20 de Enero de 1869, en su artículo 12 manda, que todo funcionario tiene la obligacion de proporcionar con la oportunidad necesaria, al Promotor fiscal, &c. las constancias que pidiere, á V. suplico, se sirva proporcionármela á la mayor brevedad, por ser el término que tengo para emitir mi parecer, muy corto.

Tlaxcala, 28 de Abril de 1874.—*Lic. José Cirilo Alva.*